

Desde Bolivia

BRASIL - Ante las elecciones

César Uscamayta

Jueves 23 de septiembre de 2010, puesto en línea por [Barómetro Internacional](#)

Las elecciones presidenciales en Brasil perpetuarán el gobierno de la coalición de Frente Popular armado por el PT, que gobiernó durante ocho años como instrumento político del capital financiero. La política del gobierno de Lula no se ha caracterizado por un programa popular limitado sino una orientación estratégica al servicio del gran capital, nacional y extranjero, sobre la base de una alianza con sus representantes directos. La recaudación de fondos para la campaña electoral de Dilma Rousseff, la candidata a presidente de la coalición PT-PMDB, es el doble (casi cien millones de dólares declarados) que la de Serra, el candidato del PSDB, a pesar de los pergaminos reunidos por este como representante de la burguesía paulista y del capital internacional. Sin embargo, detrás de la continuidad del gobierno de Lula, se diseña una crisis política cuyas dimensiones serán determinadas en el transcurso de su periodo de gobierno.

En los ocho años de gobierno encabezado por Lula, prácticamente la totalidad de las direcciones políticas y sindicales de la clase obrera y del campesinado fue integrada al Estado. La casi completa desmovilización de las masas, con escasas excepciones (el movimiento de los funcionarios públicos contra la reforma previsional en 2003, y algunas movilizaciones sectoriales campesinas) fue la tónica dominante en los últimos años. El Frente Popular reveló así su eficacia como instrumento de desmovilización política de las masas, contrariando a quienes habían justificado su apoyo a este con la tesis de que marcaría el pasaje a la revolución social (lo mismo ha ocurrido con el Frente Amplio en Uruguay, y también con las experiencias bolivarianas). La estabilidad del lulismo proviene de esta capacidad política, que le permitió hacer frente a distintas instancias de crisis, como el alejamiento de un sector del PT, en 2003, o la caída económica violenta de 2008. Pero esa capacidad de contención tampoco salió de un repollo: durante dos décadas, el desarrollo del PT se caracterizó por la progresiva integración al Estado y por el sometimiento de la izquierda a la dirigencia de un caudillo obrero-burgués que expresaba las ilusiones de la aristocracia obrera en un país que conoce una gigantesca miseria social. El de Lula fue el gobierno con más representantes directos del gran capital de toda la historia republicana del Brasil. Serra y Dilma-Lula son dos expresiones de la pequeña burguesía progresista de Brasil: tienen el mismo origen político y han seguido una evolución similar. La derecha histórica, reagrupada luego de la segunda guerra mundial y la caída del varguismo, está desintegrada y políticamente liquidada.

La derecha burguesa se nuclea actualmente en el PMDB, partido que suministró la base parlamentaria a Lula y que ha designado al candidato a vicepresidente de Dilma, Milton Temer, jefe del partido. El PMDB es una enorme articulación de gobernadores represivos, diputados corruptos, intendentes cleptómanos y ladrones de todos los matices, que sin embargo no tiene capacidad de ofrecerse como alternativa de gobierno; ha presidido la Cámara de Diputados y el Senado, es el partido con mayor control de alcaldías (más de 1200, contra 550 del PT) y, con la vice-presidencia del país, pasaría a controlar las palancas decisivas del poder político, sin desgastarse en una elección presidencial y escudándose en la popularidad y los votos de Lula. En cuanto al poder económico, el PMDB controló seis ministerios (con presupuesto de 150 mil millones de dólares), incluido el más estratégico y de mayores recursos (Minas y Energía, con 80 mil millones de reales), lo que le permitió, con su poder de nombramientos, controlar un porcentaje mayor que el del PT de la parte estatal de Petrobrás, un 40%; el resto está distribuido entre accionistas, en especial los fondos de pensión norteamericanos. Su jefe parlamentario (José Sarney, un gran latifundista y criatura política de la dictadura militar) fue salvado del impeachment (y hasta de la cárcel) por el propio Lula. El Frente Popular es la cobertura política de la derecha y de la gran burguesía.

En la actual campaña electoral no existe, por lo tanto, una polarización entre “izquierda” (PT) y “derecha”

(PSDB). Existe un acuerdo tácito entre ambos de no tocar los centros neurálgicos de las políticas de Lula, los 300 mil millones de reales (más de US\$ 150 mil millones), 10% (diez por ciento) del PIB, concedidos al gran capital, en los últimos dos años (en exenciones impositivas, subsidios y otras regalías) para evitar la quiebra de sectores enteros (en especial las grandes plantas automotrices), las renegociaciones ad infinitum de las deudas de latifundistas y de grandes deudores de la previsión social, sin hablar de las centenas de miles de despidos provocados por las repercusiones de la crisis capitalista mundial. La extrema generosidad del gobierno con el gran capital provocó la primer caída de la recaudación fiscal en más de una década y un costo estimado de la crisis de R\$ 320 mil millones (US\$ 180 mil millones) sin contar la fuga de capitales y el déficit de cuenta corriente.

La política externa del gobierno petista apuntó a la contención de los procesos nacionalistas “radicales” de América Latina y a la intermediación con el gobierno norteamericano, en especial para sustentar la política de reintegración de Cuba al concierto capitalista. Se encuentra en marcha una política de entendimiento en materia de producción de combustibles y del conjunto de la energía. Contra lo que dejan suponer los acuerdos con China, el escenario es de una rivalidad que va creciendo frente a la competencia de mercancías e inversiones de China en América Latina. Lula ha desarrollado como nadie antes la agenda de la burguesía brasileña. En el celebrado acuerdo nuclear Brasil-Irán-Turquía, Lula siguió un guión sugerido por el propio gobierno de Obama, que desconoce el derecho al desarrollo energético independiente de Iran y que aprieta el cerco diplomático-militar contra ese país.

Brasil ha sido el teatro de una intensa especulación financiera, que ha inflado su capacidad de consumo y, hasta cierto punto, de inversión. Las masas explotadas y las clases medias ven ilusoriamente en el lulismo un factor de integración, de ascenso social y de progreso económico sine die. Los programas sociales (“Bolsa Familia” y otros, que benefician 58% de la población, contra 8% en 1978) no consumen más que 0,4% del PBI, pero denuncian la incapacidad del gobierno y del capital para desarrollar las fuerzas productivas capaces de incorporar a las masas brasileñas a un proceso industrial. El déficit histórico alcanzado por la cuenta corriente con el exterior es una radiografía del saqueo del país por parte del capital en su conjunto y del financiero-especulativo (casi 50 mil millones de dólares contra 28 mil millones de dólares, en 2008, el “año de la crisis”); la deuda externa ha crecido casi 14% en el primer semestre (volviendo a los niveles “pre-Lula” del año 2000) y la fuga (oficial) de capitales ha superado los 15 mil millones de dólares. La economía brasileña es una bomba de tiempo.

La bancada parlamentaria del PT es de 83 diputados sobre un total de 513. Esta circunstancia obligó a Lula a construir su base parlamentaria con otros partidos. Aunque el futuro gobierno de Dilma es presentado como una tendencia a la consagración de un partido único, en virtud de que ganaría una mayor base parlamentaria, la verdad es que esta llamada «mexicanización» empieza por el final, cuando, como ocurre con el PRI del país azteca, el PT está afectado por un elevado grado de descomposición. El PT y la coalición lulista son un campo de batalla por el control de un presupuesto estatal en retroceso.

La candidatura presidencial de Dilma afecta la continuidad del régimen semi-bonapartista establecido alrededor de Lula. El oficialismo apuesta a una gobernalidad institucional que expresaría la madurez social y política que habría alcanzado Brasil; se dejaría atrás la excepcionalidad del lulismo. La perspectiva de una reforma constitucional (con una “Constituyente exclusiva”), que le de forma a este tránsito, podría convertirse, sin embargo en una caja de Pandora, al poner al desnudo la atomización política de fondo que condiciona al régimen actual. La candidatura “ecológica” (PV) de Marina Silva, por ejemplo, ex ministra de Lula, tiene un 8-10% de las intenciones de voto, que provienen, unos, de la izquierda (Heloísa Helena, del PSOL, la apoya explícitamente) y, otros, de la derecha - los “ambientalistas” conservadores.

“La izquierda del PT” se presenta dividida en sus tres expresiones (PSOL, PCB, PSTU) y no critica al gobierno de Lula en su propaganda electoral televisada. Ninguna de las tres llega a 1% de las intenciones de voto. Reducida a la insignificancia política, es, no obstante, la única izquierda existente en el país. Lo más importante no es siquiera esto sino la incapacidad para caracterizar las razones que la han llevado a esta situación. Intentando crecer durante largos años en el seno del PT y a la sombra de Lula y de su política de Frente Popular, todas estas fracciones continúan medrando con políticas de maniobras de unas

respecto a las otras, en oposición a una política de clarificación de las divergencias y de señalamiento de los objetivos estratégicos. Escuda su impotencia en la caracterización de que « la crisis no ha llegado a Brasil », como si todo no fuera a ser peor para ella cuando su arribo deje al desnudo su falta de estrategia. En el periodo pre-electoral volvieron a intentar concretar un frente de izquierda, a pesar de sus orientaciones contradictorias, lo que dejó a la vista del electorado un escenario de mezquindades políticas, que se cobraran un precio. La unidad sin principios está acompañada por un feroz faccionalismo. La perspectiva para construir una alternativa revolucionaria no pasa por las maniobras para armar un frente que sería democratizante sino por una delimitación enérgica de posiciones en función del desarrollo de un partido revolucionario. El fracaso del maniobrerismo de izquierda quedó de manifiesto en el fracaso del congreso reciente de la izquierda sindical, Conclat.

Desde 2009, frente a la crisis y los despidos, se ha producido un repunte de las luchas obreras, inclusive en sectores estratégicos, pero todavía lejos de una ofensiva de clase. Grandes sectores de asalariados, como metalúrgicos, bancarios, petroleros (estos, por primera vez en huelga en 14 años, después de la derrota de 1995, en 17 plantas y refinerías), obreros de la construcción, Correos, cruzaron los brazos y ganaron las calles en defensa de sus salarios y reivindicaciones. Los agrupamientos Conlutas e Intersindical, independientes de la CUT y de las demás centrales sindicales burocratizadas y progubernamentales, fueron los más activos en esas luchas, y convocaron a un Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (Conclat) para crear una central sindical y popular clasista. Cuando estaba planteada la adopción de un plan de lucha nacional por el salario, contra los despidos y por la escala móvil de horas de trabajo, por la independencia clasista de las organizaciones obreras, por la reforma agraria y urbana y por la defensa de las ocupaciones de tierra, la Conclat votó medidas de lucha muy limitadas y no consiguió estructurar un principio de alternativa sindical, pues se dividió nada menos que en la cuestión del nombre de la nueva central, ingresando en un impasse del que aun no ha salido.

La supuesta victoria de la izquierda en el PSOL, al lograr imponer la candidatura de Plinio de Arruda Sampaio (contra la pretensión de Heloísa Helena, y sus comparsas del Secretariado Unificado, de apoyar la candidatura burguesa del Partido Verde), se reveló enseguida una ilusión, pues el propio PSOL es una ficción política. Más allá de las tiradas pintorescas de su veterano candidato, el PSOL no superó en ningún momento su condición de partido-frente dividido, desmovilizado, y sin actividad orgánica en la clase obrera organizada, una sigla que abriga corrientes de las más diversas, que actúan de modo independiente y contradictorio. A esas características de nacimiento le agrega ahora que la mitad del partido simplemente no apoya su candidato presidencial, y lo hace por otra candidatura parida en las componendas del lulismo. Dejando de lado las especulaciones sobre la (probable) explosión del PSOL, su simple continuidad (que sólo podría ser el resultado de enjuagues burocráticos) es un obstáculo al desarrollo político independiente del activismo. .

La candidatura del PCB es la de la sombra de la sombra del viejo aparato del estalinismo brasileño, cuya trayectoria de seguidísimo a la burguesía reivindica.

La candidatura del PSTU-LIT (Zé Maria, dirigente de Conlutas - Claudia Durans, sindicalista del Andes-SN), organización que se reivindica del trotskismo de larga trayectoria, con protagonismo en el limitado reagrupamiento independiente de la vanguardia obrera y juvenil (con el sindicato Conlutas y la Anel, corriente estudiantil anti-gubernamental), va a las elecciones con un programa democratizante, que propone “una democracia muy superior a la actual”, o “un programa de los trabajadores construido colectivamente”. Reivindica un democratismo formal que esquiva las cuestiones estratégicas que cobran actualidad con la bancarrota capitalista mundial y la perspectiva que produzca situaciones revolucionarias.

El PSTU había lanzado, en un comienzo, la candidatura de Zé Maria (metalúrgico, ex dirigente de la CUT y coordinador del agrupamiento sindical Conlutas) como “pre-candidatura obrera independiente”, para reactivar el Frente de Izquierda con el PSOL y el PCB, y presionar a la democratizante-clerical Heloísa Helena como “candidata obrera independiente”, incluso después que esta declarara su preferencia explícita por una candidatura burguesa. En el Conclat de junio pasado, que reunió cuatro mil delegados sindicales, populares y juveniles, el PSTU había sustraído del debate la cuestión de las elecciones

presidenciales y del “frente de izquierda” (que fue propuesta por algunos sectores del PSOL presentes).

El PCO, por su lado, auto marginalizado de la izquierda, realiza una campaña “constitucionalista” y pseudo-nacionalista, que defiende la Petrobrás varguista (ciento por ciento estatal) y la estructura sindical integrada al Estado, motivos por los cuales boicoteó al Conclat y a la Conlutas). De todos los partidos de izquierda presentes, el PSTU es el único que tiene una relación activa con los sectores avanzados del movimiento obrero.

El impasse político en que ha sido puesta la vanguardia obrera brasileña sólo puede ser superado a través de un claro balance político, cuyo debate impulsa el Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional, a escala internacional.

<http://amr-bolivia.blogspot.com>